género

Y SOCIEDAD

CENTRO DE ESTUDIO DEL GENERO
VOLUMEN 2 • NUMERO 2 • SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1994

POR UN CAMBIO DE ESTRATEGIA: EN PROCURA DE LAS REFORMAS*

Carmen Imbert Brugal**

Partiendo de la inmutabilidad de los principios jurídicos y del androcentrismo del derecho dominicano se trata de trazar las pautas para una discusión que permita cambiar la estrategia en procura de las reformas legales que nos garanticen la igualdad y el reconocimiento de infracciones particulares que sólo a las mujeres afectan.

Taking into account the fixed character of Dominican judicial principles and the androcentrism of the law, an attempt is made to establish guidelines as an aid to developing new strategies leading toward legal reforms that give women equal rights and acknowledge the existence of gender-specific infractions.

El derecho es una disciplina androcéntrica, quizás la que más. Esta característica incide de manera determinante en la construcción y pervivencia de instituciones que nos marginan sin el menor rubor.

* Ponencia presentada el 8 de junio de 1994 en el seminario "Democracia y Género: Planificación Estratégica e Intervención Social" organizado por el Centro de Estudio del Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la Fundación DEMOS con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert.

**Jurista-feminista.

El mundo igualitario, el respeto a las libertades individuales, la inserción en la sociedad se pensaron en masculino, así lo incorporamos nosotras, sin percibirlo, creyéndonos acreedoras de prerrogativas que nos excluyen.

Si la sociedad obedece a un orden predeterminado, funciona de acuerdo con reglas que tienden a garantizarlo; necesariamente, hay que subvertir ese orden utilizando los mismos instrumentos establecidos. Se podría afirmar entonces, que las reformas legales que precisamos no serán posibles si las personas que integran los organismos encargados de elaborar las leyes carecen de la debida perspectiva de género.

En la República Dominicana existen los proyectos —incompletos y coyunturales— que consignan las modificaciones legales y la creación de infracciones, evaluando a la mujer de una manera muy diferente a la que ha hecho el ordenamiento jurídico desde la fundación de la República. Sin embargo el conocimiento de los proyectos, la asunción de la necesidad de aprobación de los mismos no está en la agenda de la superestructura.

Es innegable que la oratoria política ha variado en lo que al tema mujer compete, pero sólo eso. La seducción que provoca un discurso que no resuelve, que no nos incluye en la toma de decisiones y que nos va utilizando conforme a la demagogia del momento, se convierte en una desventaja; algunas —las más ingenuas o las más comprometidas con lo establecido— cometen el error de creer que con eso basta o que es señal de cambios ulteriores. Prueba de lo expresado es la escasa representación de las mujeres en el Congreso Nacional, a pesar de la enorme campaña hecha por grupos autorizados, fuera y dentro de los partidos políticos, y la constante invocación del tema, cada vez que los líderes políticos lo consideran pertinente.

Indiscutible ha sido la resistencia del poder legislativo para conocer el conjunto de reformas legales propuestas por organizaciones de mujeres, pero debemos admitir también la ausencia de estrategias jurídicas válidas de parte de esas mismas organizaciones para exigir los cambios, quizás atribuible al desgano demostrado en conocer las intimidades de lo legal, negadas durante un tiempo a los no iniciados como si se tratara de un saber exclusivo para un grupo selecto. Es el mito de la sacralización del profesional del derecho y de las habilidades de su ejercicio. (No es casual que utilice sólo el masculino, aún no ha llegado el momento de atribuirle las mismas dotes a la profesional del derecho).

Si en otras naciones se discute ahora la validez o no de la normativa legal, sus intrínquilis excluyentes y epistemológicas, aquí debemos tratar de conocer: la finalidad de la regla de derecho, sus fuentes; la situación legal específica de la República Dominicana en relación con los cambios legales ocurridos en Sur, Centro América y el Caribe; la dificultad técnica que nos impide asimilarnos a las corrientes procesales más innovadoras por la naturaleza misma de nuestro sistema jurídico; la resistencia demostrada en la academia cuando de asumir la lectura genérica de las leyes se trata, sin importar el riesgo que para las generaciones sucesivas de abogadas y abogados eso conlleva.

Asimilar lo enunciado, asumir como una premisa irrefutable que los cambios legales auspiciados por los entendidos no incluyen nada relativo a la mujer y les cuesta trabajo y orgullo profesional entender que no compartir las reformas deseadas permite comprender la dificultad que se ha tenido. Escasos integrantes de la comunidad jurídica conocen las razones que motivan la elaboración de los proyectos que modifican artículos del Código Penal, Civil, de Salud. La doctrina jurídica nacional está plagada de prejuicios, aunque demuestre una impecable factura técnica. Pero también es preciso reconocer que durante

un tiempo se pensó que las estadísticas bastaban para demostrar nuestra situación de preteridas, hace poco se entendió la necesidad de la promulgación de leyes que consignen nuestra realidad como personas con obligaciones y derechos y que además tipifiquen infracciones que sólo tienen como víctima a las mujeres.

Finalidad y fuente de la regla de derecho

La regla de derecho satisface en las sociedades la necesidad de seguridad, de orden, de justicia (Mazeaud, 1969). La retórica jurídica, ampulosa por esencia, tuvo que descartar la justicia como necesidad a satisfacer por la regla de derecho, la reserva a otras corrientes y se ha conformado con la "equidad", menos divina, más material.

Cuando se habla de seguridad, orden, equidad, sociedad, se está pensando en esa humanidad que conforma la nación y que logró, después de la revolución francesa del 1789 la igualdad, la voz, el respeto. Esa humanidad masculina fue y ha sido la beneficiaria (a pesar de la precariedad) de la Declaración de los Derechos del Hombre y ha sido y es la protagonista en las luchas occidentales por y para el respeto de los derechos humanos, ha sido y es la inspiración de los textos que conforman la bibliografía del saber jurídico clásico. Así se construye el androcentrismo de una disciplina que a través del tiempo incorpora a mujeres que repetirán conceptos o que rubricarán emocionadas manifiestos libertarios en pro de la defensa de los presos, por la aplicación de la ley, por el destino de los proletarios del mundo, por el respeto de los derechos humanos, sin reparar en su ausencia. Ellas no contaban, no cuentan en esas instancias.

La inmutabilidad de los preceptos jurídicos se les imponía y en nombre de ellos pedían para otros lo que no se había planteado concederles. Alda Facio señala:

[...] debido al poco valor que [las] sociedades patriarcales le dan a las mujeres, la opresión de éstas no es considerada tan nefasta como otras. [...] ningún país [...] ha sido denunciado por prácticas inhumanas [...], como lo es por ejemplo, la clitoridectomía, mientras que sí se han denunciado prácticas inhumanas contra razas o etnias, grupos religiosos, credos políticos, etc. Es más, muchas prácticas inhumanas contra las mujeres han sido toleradas [...] en aras de un respeto por las diferencias culturales, respeto que no sienten cuando de racismo se trata, por ejemplo, tal vez porque el racismo afecta negativamente a muchos hombres mientras que el sexismo brinda privilegios a la mayoría de ellos. (Facio, 1992:46).

Bien organizada la sociedad con los parámetros patriarcales imprescindibles, ajenas nosotras de las grandes epopeyas —de acuerdo con los historiadores tradicionales— siendo excepcionales testimonios que ofrezcan constancia de la participación de la mujer en la creación de las normas que pautan el funcionamiento, nacimiento y necesidad de las instituciones que hasta hoy nos rigen y se citan como ejemplo de la civilidad occidental, se conforma la regla de derecho y se reconocen como fuentes que determinan su existencia: la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la práctica, la doctrina (Mazeaud, 1969).

La ley es la más importante para nuestro sistema jurídico y para lo que tratamos de exponer. La definición más recurrente la explica como una regla obligatoria, que se impone a todos, emana de autoridad pública, es general en su aplicación y es permanente (Mazeaud, 1969).

La ley de leyes es la Constitución de la República, leyendo sus artículos se percibe el ideal democrático androcéntrico.

Desde su redacción en masculino —aspecto trivializado por las logias jurídicas nacionales— hasta las disposiciones generales francamente excluyentes cuando no perjudiciales.

Es la Constitución que consagra como fundamento legal de la familia el matrimonio.¹ La letra d de su artículo 8 prescribe que a la mujer casada se le reconoce plena capacidad civil y que la ley establecerá los medios necesarios para proteger sus derechos patrimoniales. En el título correspondiente a la nacionalidad se establece que la mujer dominicana casada con un extranjero podrá adquirir la nacionalidad de su marido. La mujer extranjera que contrae matrimonio con un dominicano seguirá la condición de su marido, a menos que las leyes de su país no se lo impidan. Interesante es observar que estas disposiciones no se refieren al hombre casado y tal como comentábamos en un análisis similar interesa poco al Estado conservar la nacionalidad de las mujeres ya que les permite, después de rubricar el contrato de matrimonio, cambiarla.

Las ventajas que concede la Constitución y otras leyes a la mujer están indisolublemente ligadas al hecho del matrimonio, las relaciones consensuales no sólo son ignoradas, resultan ilegales.

Es sin embargo la misma Constitución que nos ofrece los mecanismos legales para elaborar una estrategia de validación a las demandas en procura del reconocimiento de nuestros derechos y del conocimiento de los proyectos que tienden a modificar nuestra situación jurídica al consignar en su artículo 8 numeral 5 que:

¹En *Género y Sociedad*, vol. 1, n.º 2 aparece un comentario sobre la Constitución hecho por Carmen Imbert Brugal. Tanto aquel trabajo como el presente se pensaron antes de la modificación a la Constitución realizada en agosto del año 1994, después de la firma del Pacto por la Democracia que supuestamente sirvió para finalizar la crisis post-electoral del país.

A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe; la ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad, ni puede prohibir más que lo que la perjudica.

Y a pesar de la redacción en masculino el artículo 100 igual que el anterior dispone:

La República Dominicana condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos, entre los cuales no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de las virtudes.

Además de la Constitución existen —de manera excepcional— los decretos, leyes, las resoluciones y la ley contenida en los códigos con sus modificaciones pertinentes.

¿Quién hace esas leyes que garantizan la vida estable de la nación y conceden a los ciudadanos derechos inalienables?

El Poder legislativo tiene esa prerrogativa. Los senadores, diputados, el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes de acuerdo con el artículo 38 de la Constitución de la República. Así suena muy hermoso, pero sucede que a ninguno de los representantes de esas instancias se les ha ocurrido tener la iniciativa —con escasas y esporádicas excepciones— para presentar un proyecto de ley trascendente cuyas disposiciones nos beneficien, no para darnos más sino para hacernos iguales en tanto y en cuanto somos sujetos de derechos y obligaciones.

La Constitución consiga, y ya lo mencionamos, que la ley no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad, ni puede prohibir más que lo que la perjudica. Al parecer ha

sido “justo” y “útil” reducirnos a menores de edad durante buen tiempo, limitando nuestros derechos, y muy “útil” además para la comunidad controlar el uso de nuestro cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, culpabilizarnos cuando de estupro se trata, ignorar la violencia doméstica, el acoso sexual, la desigualdad en cuanto a oportunidad y retribución laboral respecta, ha sido útil imponernos el matrimonio para así sólo poder decir que tenemos familia y garantizamos la sucesión, la transmisión y seguridad de un patrimonio ajeno en el disfrute pero propio en el esfuerzo.

La historia está ahí, en 1940 una situación particular de la tiranía² permitió que se promulgara la ley 390; en 1978 (38 años después) con bastante atraso se promulgan las leyes que permiten el co-gobierno familiar y algunas libertades civiles dentro del matrimonio para las mujeres.³ Pero en el aspecto público, específicamente en el Código Penal nada se ha logrado. Adulterio —como infracción—, virginidad, matrimonio como forma para obviar la acción pública, aborto, homicidio excusable en caso de adulterio flagrante, estupro, todas las cuentas de un rosario, que sin saber los misterios rezamos cada día.

Antes del año 1940, desde la adaptación de los códigos franceses, la mujer no podía testar, no tenía capacidad para prestar testimonio, no podía ejercer la tutela, no podía disponer de sus bienes. Es extraordinario el lapso de tiempo que ha mediado

²Desde el 1930 hasta 1961 la República Dominicana fue sometida por una tiranía presidida por Rafael L. Trujillo.

³El conjunto de leyes promulgadas en 1978 ha sido de manera suficiente evaluado en el país; no obstante, hay que precisar que las ventajas de las mismas excluyen a las mujeres solteras y sin trabajo formal. A pesar de las indiscutibles modificaciones la aplicación no ha sido satisfactoria. Y en cuanto a los regímenes matrimoniales respecta, sino un engaño, podríamos hablar de un desliz pues aún está vigente en el código civil el artículo 1421 que reza: El marido es el único administrador de los bienes de la comunidad. Puede venderlos, enajenarlos, hipotecarlos *sin* el concurso de la mujer.

entre las reformas que benefician a la mujer; es evidente el recato demostrado en admitir esta situación.

Si no aparece el/la legislador/a que promueva el conocimiento de los proyectos tendentes a modificar esas disposiciones vejatorias, se impone la constancia en las demandas, el fortalecimiento de un movimiento de mujeres que se atreva a jugar al poder conociendo sus reglas para tratar de cambiarlas.

Y culpa del patriarcado es y no de nosotras que insignes representantes de la institucionalidad expresen criterios como el siguiente:

Tratemos de despertar en el legislador la inclinación en favor de la mujer que la sicología llama uxorius. Ese es un complejo que conduce al legislador a convertirse en paladín de los intereses de la mujer. Napoleón era sano, nunca sufrió ese complejo, siempre afirmó que la mujer pasaba de la tutela del padre a la tutela del marido. (Tomado de una ponencia presentada por un representante del poder judicial dominicano en 1985).

El autor recrea a Carbonnier, teórico jurídico por excelencia que afirma: "el legislador del siglo XX está obsesionado por ese complejo y aplica la teoría de las tres K a las mujeres casadas." Esta maravilla consiste en atribuirle a la mujer dominio en un triple reino "Küche, Kinder, Kirche" (cocina, educación de los niños y participación en la vida de la Iglesia). Agrega Carbonnier:

Naturalmente todo esto supervisado por el esposo para que no se violente el tren de vida de la familia ni se destruya la unidad del hogar con enseñanzas contrarias a la moral. (Citado por un representante del poder judicial dominicano en una ponencia presentada en 1985).

El trabajo político en procura de las reformas deviene en inútil si se hace al margen del conocimiento de la doctrina y del desarrollo del pensamiento jurídico nacional. Los criterios jurídicos se consideran inmutables por estos lares, el interés social, la seguridad y el orden así lo exigen y lo enseñan, sin embargo cuando se trata de la defensa o del ajuste de los supuestos intereses colectivos la inmutabilidad se desconoce, no se ha considerado "interés colectivo" ni asunto de seguridad o de orden revisar la legislación para modificar la situación jurídica de las mujeres.

Procede pues, buscar y encontrar la manera para modificar ese pensamiento, sin estridencia, subrayando la pertinencia y seriedad de los cambios permitidos y exigidos por convenciones, acuerdos y tratados internacionales. Así se entiende en la mayoría de los países occidentales, así se está tratando de hacer, sin desconocer —porque no se puede— la estructura legal que determina, pauta y cree en lo que existe sin objeción y en ocasiones atribuyéndolo al "orden natural de cosas".

El discurso feminista aislado, destinado a instancias partidistas cumple una función pero no es suficiente, se inutiliza cuando tropieza con la academia, con los gremios profesionales, con la persona aislada del contexto que se trabaja. Además del discurso androcéntrico, público y privado, la inercia del poder legislativo se acentúa porque todo el tinglado legal está estructurado para no dejarse permear. Los textos que se utilizan en las escuelas de derecho para la formación de los/as cada vez más numerosos/as profesionales del derecho contribuyen de manera determinante a preservar el orden asumido como inmutable.

No pretendemos hacer un análisis de textos jurídicos, pero sí es pertinente otro ejemplo como el ofrecido en relación a la enfermedad del legislador denominada uxorius, supra indicado.

Veamos: desconociendo investigaciones que se suceden y que arrojan resultados cuasi incuestionables, desmitificando lo que hasta hace decenas de años determinó toda la conceptualización sobre el estupro, se leen juicios como el siguiente: "...las violencias que ejerza un marido sobre su esposa, cuando ellas tiendan a la realización de los fines legítimos del matrimonio, no pueden jamás constituir el estupro..." (Charles Dunlop, 1986:205-6). La opinión dominante sostiene que el marido tiene derecho a copular con la mujer y por tanto, aunque lo hiciere contra la voluntad de ésta e incluso por medio de la violencia física o moral, no comete crimen de estupro, pues no delinque quien ejerce un derecho...

En lo que atañe a la resistencia en el mismo caso de estupro se enseña: "Preciso es, pues, tener muy en cuenta la edad de la víctima, sus inclinaciones, su conducta anterior, su constitución anatómica y las condiciones que rodean el hecho: lugar, hora, etc." (Charles Dunlop, 1986:206).

Justo es reconocer que todas estas elucubraciones están en consonancia con el predicamento legal y acorde con los elementos constitutivos de la infracción tipificada en el Código Penal vigente, es lo que ocurre también con la no asunción del acoso sexual y la violencia doméstica, se hace obedeciendo al principio de la legalidad de las infracciones y las penas propio de nuestro sistema procesal penal: "No hay delito ni pena sin una ley previa".

La regla de derecho sí ha logrado su objetivo en nuestra sociedad, lo ha hecho subrayando las diferencias, lo ha hecho al convencernos que la ley es igual para todos, que existe una presunción de inocencia, que los ciudadanos tienen garantías constitucionales.

El poder judicial, brazo represivo del Estado, se activa cuando la élite precisa la sanción condigna que le haga sentir a los subalternos su condición y así valida su existencia mediante una sentencia condenatoria en la mayoría de los casos —los descargos están reservados para los excepcionales casos de equívocos en cuanto al sujeto del proceso penal. Esta regla de derecho, tan preciada, está concebida para el ideal de persona construido por la superestructura. Cuando las minorías pretenden su inclusión en la norma ésta se resiente y cuando de mujeres se trata ocurre lo mismo y es porque está pensada en términos étnicos, sexuales, sociales evidentemente excluyentes; determina y exige el desarrollo de un ciudadano y ciudadana ideales, creados y moldeados. Quien supere los límites establecidos no tiene protección, no existe.

Origen y características del sistema legal dominicano

Si se compara nuestro sistema legal con el de cualquier nación cercana es fácil comprobar que estamos a la zaga de los cambios que se suceden de manera constante, creando en ocasiones escuelas jurídicas a tomar en cuenta. Hasta el léxico jurídico que llega a convertirse en uniforme, nos separa de sistemas legales americanos y caribeños. En lo referente a la mujer el desfase es mayor. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, fue sancionada por la República Dominicana en el año 1982, la misma fue elaborada en 1979, a partir de ese momento y sin motivo para la algarabía, pero sí para la esperanza, se ha intentado —lográndose en algunos casos— modificar la legislación en los países signatarios. Tímidas, si se quiere, las conquistas, pero es indudable que los cambios formales están ocurriendo y sin ser casual, en países donde los grupos de mujeres se decidieron de manera militante, coordinada y constante a la promoción de las reformas requeridas.

Se ha logrado tipificar la violencia doméstica, modificar aspectos relativos al estupro, al abuso y acoso sexual. En lo que al aborto concierne nos llevan la ventaja de la sinceridad, se atreven a discutir de manera constante y pública el tema aunque el texto legal no se adecúe al discurso.

¿Y nosotras qué; cuántas y cuáles academias asumieron el proyecto de reformas elaborado en el contexto de lo pautado por la Convención ratificada; cuántos y cuáles partidos políticos, superada la contienda electoral, continúan discutiendo o mencionando el tema? ¿Por qué resulta tan difícil en la República Dominicana modificar una ley, al margen del auspicio foráneo y o de la presión coordinada de los grupos interesados en obtener los cambios?⁴

Procede ahora hacer referencia al origen de nuestra legislación, aunque reconociendo que limitarnos a sus raíces no es suficiente para entender las dificultades. Dentro del patriarcado eliminar el sexismo, mediante leyes nuevas o modificadas, es casi utópico. Todavía en nuestro país, desconociendo las reformas del 1978, a la mujer que solicita un préstamo en algunas instituciones bancarias le requieren la autorización del marido, lo mismo ocurre cuando pretende salir del territorio nacional con su hija o hijo menor.

Producto de conflictos e intereses seculares, masculinos por demás, la historia nuestra fue determinada por las naciones que se disputaban, como hoy igual se disputan, estas islas de coco, caña, ron, negros y mujeres. Así se creó Haití, así la República Dominicana. Los veintidós años de ocupación haitiana construyeron el pensamiento jurídico nacional. Los códigos franceses

⁴Debe servir de ejemplo la estrategia exitosa del sector nacional que auspició y obtuvo la reforma del sistema tributario. Es evidente que en este caso no importaba la misoginia.

se aplicaron en Haití desde 1816 y estuvieron vigentes hasta la promulgación de los haitianos —copia de los anteriores—. Después de la separación o independencia, se ordenó en 1845 que en la nueva república rigieran los códigos franceses, éstos eran los mismos haitianos y si el hecho de que estuvieran en francés, antes de la república, no importaba mucho, en la nueva coyuntura sí se precisaba enmendar el escollo del idioma (Vega, 1986).⁵

Se criticó en la época no sólo la diferencia de la lengua sino el origen del conjunto legal que obedecía a los reclamos de una sociedad muy distinta a la nuestra. Fue durante el gobierno de Ulises Heureaux, en 1884, que se tradujeron, aprobaron y promulgaron todos los Códigos Napoleónicos (Vega, 1986).

Esta dependencia jurídica francesa nos ha colocado al margen del avance jurídico no sólo de naciones cercanas sino de la propia metrópoli legal. De más no está señalar que las naciones suramericanas y caribeñas se rigen por sistemas de leyes distintos al nuestro y diferentes entre sí, por eso es tan difícil la unidad jurídica, la adaptación de procedimientos que aquí resultarían inoperantes o de difícil inclusión sin alterar el ordenamiento procesal. Para subrayar la diversidad estos casos resultan representativos: el Código Penal chileno está inspirado en el español de 1848; el de Paragua y es de inspiración bávara; el de Ecuador, belga; el Código fascista de Rocco determinó las legislaciones penales de Uruguay y Brasil; Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala adoptaron los códigos españoles de 1870. El Caribe inglés se rige por el derecho anglosajón. Cuba, antes y durante la revolución, tiene un sistema jurídico español. Puerto Rico, por su particular situación, mezcla la herencia jurídica hispana con la de E.U.A. Sólo Haití y República Dominicana

⁵Ver Peguero, Valentina y Danilo de los Santos, *Visión general de la historia dominicana*.

conservan la codificación napoleónica (Rico, 1977, citando a L. Jiménez de Asúa).

Aunque los casos citados se refieren al derecho público, lo mismo ocurre con el derecho privado.

Los códigos franceses se consideran una obra maestra del pensamiento jurídico universal —la lectura genérica es la que está ausente. La obra maestra que mencionamos es misógina por esencia y discutir y cambiar eso se impone; desde adentro es muy difícil, los/as juristas continúan aquí respetando a pie juntillas el espíritu legal tradicional.

Modificación de estrategias en procura de las reformas

Propugnar por reformas legales era hace tiempo estigma y reacción, hoy es válido, necesario, se juega a la legalidad y sin leyes que nos contengan nada conseguiremos, para nosotras “la costumbre *no*⁶ hace ley”.

El discurso patriarcal más liberador no nos contiene, estamos excluidas de la utopía igualitaria, pienso que no nos damos cuenta porque las coyunturas siempre nos arrastran. Tenemos para la vida pública “actitudes maternas”, dejamos lo nuestro para ocuparnos del otro, así en masculino. Perdonamos, postergamos y nunca pedimos la cuenta de la deuda que nos cobran desde el génesis.

Aceptamos como excusa y explicación de la exclusión en las sesiones del Congreso el engavetamiento de los proyectos presentados, pero esa gaveta es abierta y cerrada por una mano.

⁶Cursivas más.

Quizás podamos discutir esto aquí, hoy, pero la excusa no es válida, las culpas debemos repartirlas, no para la conformidad sino para la revisión de actitudes. Nosotras seguimos votando, seguimos apostando en la tómbola de una democracia que nos tiene como adorno y dispersas.

No es tan difícil jugar a las reformas, podemos, como mencioné al principio, utilizar los mismos instrumentos establecidos. Con la Constitución y la Convención de las Naciones Unidas podemos dirigirnos a cualquier foro internacional y denunciar que se violan nuestros derechos, que estamos excluidas de la "democracia", que somos víctimas de un "fraude colosal".

La Constitución en su artículo 8 reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse dentro de un orden de libertad individual y de justicia social compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Sin embargo no se respetan nuestros derechos como persona cuando nos exigen ser "honestas" para reclamar una sustracción, cuando nos piden pruebas de un ayuntamiento carnal, normal y lícito y es el cónyuge que nos destroza el cuerpo, cuando después de un estupro abortar es un crimen, cuando alegan que nos prostituimos por "vagabundería" y que vamos a Europa porque no queremos lavar en nuestro país. Tampoco nos respetan cuando además de concedernos derechos sólo si accedemos al matrimonio es el marido que administra los bienes. No se puede hablar de justicia social compatible con el orden público cuando en ese orden somos espectadoras y no actoras.

La Convención tiene fuerza de ley desde que fue ratificada y aprobada en el Congreso y sólo nos bastaría el artículo 2 de

la misma y sus considerando para reclamar su incumplimiento.⁷ Basta citar la letra a y f del referido artículo: Los Estados partes se comprometen a consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y la mujer y asegurar por la ley u otros medios adecuados la realización práctica de ese principio. La letra f consigna el compromiso de adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

Nada concreto se ha logrado aunque se ha hecho bastante. Si asumimos en una época que el derecho es una disciplina burguesa creada para defender los intereses de la minoría y garantizar el orden en desmedro de las demandas de la mayoría, reasumamos que es androcéntrico, que es muy difícil reformarlo —se puede lograr pero no de manera dispersa y coyuntural. Debemos enmendar las frustraciones colectivas y comprender que desde el poder se nos excluye con argumentos “democráticos” que nos hacen creer en la participación y en el ejercicio de las prerrogativas propias de los ciudadanos.

⁷Ver Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer publicada por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas.

Bibliografía citada

Báez, Clara y Ginny Taulé. 1993. "Posición socio-cultural y económica de la mujer en la República Dominicana", *Género y Sociedad*, vol. 1, n.º 2, septiembre-diciembre 1993.

Código Civil de la República Dominicana.

Constitución de la República Dominicana (1966).

Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Publicación del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas.

Charles Dunlop, Víctor Máximo. 1986. *Curso de derecho penal especial*. Tomo I. Librería Dominicana, Santo Domingo.

Facio, Alda. 1992. *Cuando el género suena cambios trae. Metodología para el análisis de género del fenómeno legal*. ILANUD, San José, C.R.

Mazeaud, Henri, León y Jean. 1969. *Lecciones de derecho civil*. Parte primera, vol. I. Ediciones Jurídicas Europa-América, Argentina.

Peguero, Valentina y Danilo de los Santos. 1987. *Visión general de la historia dominicana*. UCMM. Editora Corripio, Santo Domingo.

Rico, José M. 1977. *Crimen y justicia en América Latina*. Siglo Veintiuno Editores, México.

Vega, Wenceslao. 1986. *Historia del derecho dominicano*. INTEC, Santo Domingo.